

## INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

### TÍTULO DEL CONTRATO: “OBTENCIÓN DE INDICADORES DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DEL PCI 2021-2022”

De conformidad con lo que establece en el artículo 28 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones del contrato de referencia.

La modernización del transporte interurbano por carretera dió lugar a la implementación de un Plan de Calidad de los Servicios de Transporte Regular Permanente de Viajeros de Uso General por Carretera en la Comunidad de Madrid (en adelante PCI), que se constituye desde entonces como referencia de los compromisos de calidad con los usuarios para todos operadores de este servicio. El objetivo de este marco de referencia común para el conjunto de los operadores no es otro que establecer servicios equivalentes a los usuarios en un escenario de multiplicidad de proveedores de servicios de esta red de autobuses.

La comprobación de la implementación del PCI en cada uno de los operadores se realiza anualmente a través del cálculo de una serie de indicadores, alguno de los cuales requiere la toma de datos específicos en el momento de producción del servicio.

Este contrato se justifica ante la necesidad de recabar datos en las paradas y vehículos de la red, así como de los servicios de atención al cliente de los operadores, para el cálculo de 10 indicadores con frecuencia anual necesarios para la evaluación del PCI en las anualidades de 2021 y 2022. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63.3.a y 116.4.f de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se informa de que este organismo carece de los medios personales y materiales propios necesarios para la realización del servicio “Obtención de indicadores de campo para la evaluación del PCI 2021-2022”.

Para la ejecución del trabajo se han agrupado estos 10 indicadores en 3 grupos en función del objeto de análisis, de modo que **el contrato se divide en 3 lotes**. En el **lote 1** se han incluido los 3 indicadores que han de medirse en las paradas con Puntos de Información de Viajeros; en el **lote 2** se han incluido los 5 indicadores que han de medirse a bordo de vehículos y en el **lote 3** se han incluido los 2 indicadores que evalúan los servicios de atención al cliente de los

operadores (teléfono de atención al cliente y web). De esta forma se pretende optimizar los recursos humanos y técnicos necesarios, buscando sinergias dentro de cada lote.

En cualquier caso, la cuantía del presupuesto base de licitación no dificulta la participación de las PYMES en el procedimiento de licitación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 131 de la LCSP, al no poder acogerse a los supuestos establecidos en los artículos 167 y 168, y con el fin de asegurar una libre concurrencia del mayor número de licitadores posible, de forma que se consiga una competencia que permita una ventaja económica para la Administración, se propone un **procedimiento abierto y tramitación ordinaria**, habiéndose presentado todo el conjunto de documentación requerida y necesaria dentro del expediente.

El contrato tiene **carácter plurianual** al abarcar las anualidades 2021, 2022 y 2023. De esta forma se da cumplimiento a necesidades del CRTM de medir la calidad del servicio de autobuses interurbano cada año, y adicionalmente permite realizar un análisis temporal más profundo de los datos recabados en las dos anualidades. Por otra parte, se optimizan los recursos destinados a la tramitación del contrato, ya que se prevé que tanto el año 2021 como el año 2022 el CRTM no contará con medios propios para la ejecución de los trabajos necesarios para la realización de las evaluaciones del PCI correspondientes. Ahondando en estos hechos el contrato es **renovable** de forma anual durante 2 ejercicios más (2024 y 2025).

Para la adjudicación de este contrato, se propone un procedimiento abierto con **pluralidad de criterios**. El 70% de la puntuación valora la mejora del precio y el 30% restante se destina a un criterio cualitativo *calidad de la oferta* que se puntúa mediante juicio de valor. Según se recoge en el PCAP, dentro de este criterio se ha incluido 6 aspectos a tener en cuenta y un baremo con 5 categorías desde muy buena a muy mala para puntuarlos.

Se ha establecido un umbral técnico que las ofertas han de superar para pasar a la fase definitiva, para establecer un nivel técnico mínimo a las ofertas y evitar documentos generalistas que no demuestren tener en cuenta todas las particularidades especificadas en los pliegos de este contrato, dado su carácter eminentemente técnico. También se pretende que, dado el alto peso del criterio precio, se seleccione la mejor oferta por su relación calidad-precio y no solo la mejor económicamente.

Por otra parte, cabe señalar que, para la determinación de lo que se considerará



una baja desproporcionada o temeraria, se tendrá solamente en cuenta el precio, al considerar que el criterio *calidad de la oferta*, no es relevante en la determinación de la viabilidad económica de la propuesta.

La solvencia exigida en el contrato se establece en virtud de la especificidad del trabajo objeto del mismo. En este sentido, la clasificación exigida al contratista para los tres lotes, dada la cuantía y el objeto del servicio requerido, es Grupo L Subgrupo 3 Categoría 1 en virtud del Reglamento General de la LCSP (RD 773/2015) o bien con el Grupo L, Subgrupo 3, Categoría A (RD 1098/2001). La actividad principal del contrato o aquella que supone mayor porcentaje económico en el conjunto de la prestación requerida es la toma de datos. No existe un CPV que recoja estrictamente la que corresponde al objeto del contrato por lo que se utiliza la que se ha considerado más próxima: CPV 79300000-7, Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas para los **lotes 1 y 2**; CPV 79320000-3 Servicios de encuestas de opinión pública para el **lote 3**.

Alternativamente a la clasificación, en los contratos de servicios se puede acreditar la solvencia mediante los requisitos exigidos en el procedimiento de licitación. En este sentido, se aplica por un lado el artículo 87 de la LCSP para determinar la **solvencia económica y financiera**, exigiendo un volumen de negocios acorde con el presupuesto del contrato.

Asimismo, se siguen los criterios del artículo 90 de la LCSP para determinar los medios de acreditación de la **solvencia técnica y profesional** de los empresarios que, según indica dicho artículo, deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

En consecuencia, dada la naturaleza y especificidad de la operación de los servicios de transporte público, toda vez que el objeto de la contratación es precisamente la evaluación de sus características, parece apropiado requerir al licitador un conocimiento de su singularidad. Ahora bien, con objeto de no limitar la concurrencia que establece el artículo 1 de la LCSP, en la definición de la experiencia exigida al licitador, para los **lotes 1 y 2** se ha recurrido a concepciones genéricas relativas a trabajos de inspección en transporte, entendiendo que las actividades equivalentes pueden ser igualmente acreditativas de su solvencia. En el caso del **lote 3** se ha exigido, por la misma causa, una experiencia de realización de encuestas sin especificar el requisito de que se analice un transporte.

Por otra parte, y de forma complementaria, se han establecido requisitos que garanticen que se han llevado a cabo trabajos de la misma naturaleza, pero de



un alcance inferior cuya complejidad organizativa sea suficiente para avalar la solvencia profesional del adjudicatario.

Adicionalmente, la unidad promotora considera necesario, dada la finalidad del trabajo, exigir una solvencia profesional a los licitadores de forma que el adjudicatario se comprometa a dotar de los recursos profesionales y materiales necesarios para una ejecución correcta del contrato en virtud del artículo 76 de la LCSP. En este caso y para todos los lotes, se concreta en las tres figuras esenciales de ejecución del trabajo por la parte adjudicataria: Jefe del estudio, jefe del trabajo de campo y responsable de tratamiento de datos. En todos los perfiles, se especifica la formación mínima y que deberán tener experiencia en la realización de al menos un trabajo de dimensión y naturaleza similar al del contrato para garantizar que la experiencia de este personal clave sea directamente aplicable y con un nivel de envergadura suficiente para no poner en riesgo la calidad de los resultados, más importante aún, cuando el fin de estos trabajos es la compensación económica de los operadores de transporte por carretera.

Se ha incorporado una condición especial de ejecución de tipo social que se ha seleccionado atendiendo a la naturaleza del contrato. Así, se exige a la empresa adjudicataria que realice durante la ejecución del contrato una acción de sensibilización y formación al año de una duración mínima de tres horas acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar recogidos en la normativa vigente o en el convenio de empresa o convenio colectivo vigente.

El coste de los trabajos a desarrollar se valora en **237.487,11 euros sin IVA**, con cargo a la partida 22706 del presupuesto de 2021, 2022 y 2023 de este organismo, si bien en previsión de las dos posibles prórrogas el valor estimado del contrato asciende a 510.273,16 euros sin IVA.

Madrid, a fecha de firma  
EL PROPONENTE

Firmado digitalmente por: MAQUEDA BURGOS JUAN ANTONIO  
Fecha: 2021.02.09 14:05

Juan Antonio Maqueda Burgos  
Jefe de Área de Calidad y Atención al Cliente

